

El Senado y Cámara de Diputados, ...

PROYECTO DE LEY SOBRE REFORMA
DE LOS ARTICULOS REFERIDOS A LOS
DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD
DEL CODIGO PENAL

Artículo 1º— Refórmase el artículo 120 del Código Penal el que queda redactado de la siguiente forma:

Se impondrá reclusión o prisión de 4 a 8 años, cuando el autor sea mayor de 21 años y la víctima persona mayor de catorce y menor de dieciséis y no se encontrare en las circunstancias de los números 2 y 3 del artículo anterior.

Art. 2º— Refórmase el artículo 119 del Código Penal el que queda redactado de la siguiente forma:

Será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 15 años el que tuviere acceso carnal con persona de uno u otro sexo en los casos siguientes:

1. Cuando la víctima fuere menor de 14 años.
2. Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido cuando por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiere resistir.
3. Cuando se usare la fuerza o intimidación.

Art. 3º— Refórmase el artículo 122 del Código Penal el que queda redactado de la siguiente forma:

La reclusión o prisión será de doce a veinte años, cuando en los casos del artículo 119, resultare un grave daño en la salud de la víctima o se cometiere el hecho por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, cónyuge, conviviente, amante estable u ocasional de la madre de la víctima, ministros religiosos de cualquier jerarquía, encargado de la educación o guarda, tutor, curador, terapeuta, psicoterapeuta, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional que trabajan, médico u auxiliar de la medicina, dependiente o prestador de servicios de organismos médicos, asistenciales, de rehabilitación, educativos, deportivos y recreativos; o cuando tuviere conocimiento de padecer enfermedad sexual grave y contagiosa.

Art. 4º— Refórmase el párrafo 3º del artículo 72 del Código Penal el que queda redactado de la siguiente forma:

En los casos de este artículo no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado de su tutor guardador o representantes legales. Se procederá de oficio, por denuncia o acusación del menor cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padre, tutor o guardador o que lo fuere por uno de sus as-

cendientes, tutor, guardador, hermanos y convivientes del grupo familiar, parientes, afín en línea recta, amante estable de la madre de la víctima.

Art. 5º— Refórmase el artículo 123 del Código Penal el que quedará de la siguiente forma:

Se impondrá reclusión o prisión de 8 a 12 años, cuando en el caso del artículo 120, mediara alguna de las circunstancias expresas en el artículo anterior.

Art. 6º— Refórmase el artículo 124 del Código Penal el que quedará de la siguiente forma:

Se impondrá prisión perpetua con accesorio de reclusión por tiempo indeterminado, cuando en los casos de los artículos 119 y 120 resultare la muerte de la persona ofendida.

Art. 7º— Refórmase el artículo 127 del Código Penal el que quedará de la siguiente forma:

Se impondrá prisión de 3 a 5 años, al que abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo, corriendo alguna de las circunstancias del artículo 119, sin que haya acceso carnal.

Si el autor del hecho fuera alguna de las personas mencionadas en el artículo 122, se le aplicará de 5 a 8 años de reclusión o prisión.

Art. 8º— Refórmase el artículo 125 del Código Penal el que quedará de la siguiente forma:

El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad, sin distinción de sexo, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será castigado:

1. Con reclusión o prisión de 5 a 12 años, si la víctima fuere menor de 10 años.
2. Con reclusión o prisión de 4 a 10 años, si la víctima fuere mayor de 10 años y menor de 18.
3. Con prisión de 3 a 8 años, si la víctima fuera mayor de 18 años y menor de 22.

Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión, desde 12 a 20 años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, marido, hermano, tutor, curador o persona encargada de su educación o guarda o que hiciera con ella vida marital, o lo fuere cometido por dos o más personas organizadas a tal fin o cuando estuviere en conocimiento de que la víctima padece de enfermedad sexual transmisible y grave.

Art. 9º— Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

clusividad al menor. Por lo expuesto, los padres, tutores, u órgano jurisdiccional jamás podrán otorgar en representación del menor, una autorización para la mutilación, menos aún cuando se trate de padres que deban autorizarla en beneficio de un hijo con el perjuicio del otro, dado que el conflicto de intereses los excluye de por sí. De más está decir que el menor se encuentra imposibilitado de otorgarla, por cuanto su desarrollo mental le impide tomar plena conciencia del acto.

El derecho civil tiene como fundamental valor a la persona, su vida, la integridad física, todo lo cual es resguardado por los derechos personalísimos, cuyo ejercicio requiere de la voluntad de la persona, sin que se pueda pensar siquiera en la posibilidad de que la misma sea suplida o integrada por la de sus padres, tutores u órgano jurisdiccional alguno; el precepto no admite excepciones por más justificadas que sean las circunstancias del caso.

En la práctica los jueces se han visto en la necesidad de aplicar este precepto, admitiendo el ejercicio de un derecho personalísimo, por el representante del menor de edad, así como también se han visto en la obligación de autorizar ablaciones de menores de edad a requerimiento de los tutores aun cuando desvirtúa el contexto legal.

Es por ello que el legislador, debe recurrir en su ayuda, modificándola en el marco de los principios generales del derecho, debiendo extraer el derecho de autorizar la ablación del plexo de las facultades delegadas a los representantes legales, y por ende del ejercicio de la patria potestad. Debe negar sustento jurídico a toda autorización por su representante necesario de quienes son menores de 18 años. La manifestación de voluntad de los menores de 18 años no es válida. Los representantes que pretendan autorizar el acto basado en la concurrencia de la voluntad, estarían transmitiendo esa voluntad viciada, lo que determinaría la nulidad del acto. Tan importante es la voluntad que la misma ley dispone específicamente que la decisión es revocable hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras el dador conserve la capacidad para expresar su voluntad (artículo 15).

Sin perjuicio de las razones jurídicas analizadas, se debe tener en cuenta, el acatamiento que como comprometidos en el cumplimiento de los derechos internacionales del niño, nos involucra en la disposición que textualmente dice: "El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidad y servicios dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad".

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

—A las comisiones de Legislación General y de Acción Social y Salud Pública.

ción quirúrgica, mientras conserve capacidad expresar su voluntad, ante cuya falta la ablación a practicada.

retractación del dador no genera obligación alguna clase."

precepto legal, plantea un punto verdaderamente, dadas las características propias de los menores son inestabilidad emocional, dependencias externas, inexperiencia para valorar consecuencias de sus actos, etcétera. Estas circunstancias hacen de los menores, un punto que requiere la máxima protección jurídica dado que carecen capacidad para donar órganos.

capacidad, que la ley requiere para donar órganos no es la mencionada en el artículo 52 del Código Civil, ni su complemento del artículo 126, los alcances de los artículos 55 y 56 del Código Civil que se refiere a la capacidad para expresar voluntad, es decir que sea capaz de consentir.

refiero expresamente a la voluntad conformada, intención, es decir, a la dirección impresa al acto ponderado a la voluntad para producir el consentimiento, es decir, la conciencia y la libertad, que implica la libre determinación independiente de toda sugestión.

los incapaces, de acuerdo con el artículo 56, adquirir derechos y contraer obligaciones por de sus representantes necesarios que les da (padre, tutor). El representante obra en lugar de la capacidad, sin la participación de éste y sin la manifestación de su voluntad. Salvo en los actos permitidos, entendiéndose por tales a los derechos de los privados, innatos vitálicos que tienen por manifestaciones íntimas de la persona, que por trapatrimoniales no pueden disponerse en forma total o radical.

tipo de acto, entre los que se encuentra como el de ablación de órganos requiere en forma ante la intervención de la voluntad del dador y plenamente con los elementos mencionados son el discernimiento, la intención y la libertad.

tal sentido el artículo 13 de la ley 24.193, dice: "Los jefes y subjefes de los equipos, como asimismo los profesionales a que se refiere el artículo 3º de la ley, deben informar a cada paciente y su grupo familiar sobre los riesgos de la operación de ablación y las limitaciones resultantes, así como las posibilidades de mejoría que verosimilmente, pueden obtener para el receptor".

go de asegurarse de que el dador y el receptor comprendido el significado de la información recibida, dejarán a la libre voluntad de cada uno de ellos la decisión que corresponda adoptar. La ablación, que es indudablemente un hecho irreversible, el consentimiento corresponde con ex-

FUNDAMENTOS

or presidente:

distinción de sexo en los delitos contra la honestidad ha sido una constante en el criterio adoptado nuestra legislación penal. Se ha corregido con buen o en el caso de violación, previsto en el artículo 9, pero no así en el estupro.

realidad nos ha demostrado que pueden ser ultraperonas de ambos sexos ya que la inexperiencia no es privativa de la mujer. El varón también puede ser inexperto y sorprendido.

mitir el texto actual del artículo 120, del Código Penal, que textualmente dice: "... cuando la víctima es mujer honesta", es desconocer que personas de masculino pueden ser víctimas, y pasibles de todas las secuelas que el delito de estupro produce. La alusión a la honestidad en la práctica lleva inversión de la carga de la prueba y tiene un carácter histórico del requisito de honestidad a que se al himen intacto, conforme texto original del artículo del año 1886.

pecto de la agravación de la figura delictiva del ro y violación, merece especial consideración la sión "sacerdote", como si los únicos sujetos activos los delitos de violación o estupro pueden ser los tros de cualquier jerarquía de la religión católica. bien es cierto, la impresión de la expresión, fue losamente suplida por los jueces, quienes llevaron aplicación también a los ministros de otras religio- lado que el delito se configura en estos casos, la sión del deber de honestidad y moralidad que le se su calidad de ministro de la religión.

embargo es necesario que la ley tenga la adecuap- presión cual es la de ministro religioso, sin olvidar se trata de cualquiera de los grados que esa cal- pueda revistar.

segundo término, y siempre en el ámbito del lo 122, se propone llevar la agravación de la a con relación a los profesionales de la salud al, pretendiendo referir a terapeutas, psicoterapeu- siquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales que an con personas que sufren de alteraciones o afec- mentales, neuróticos o psicóticos, etcétera.

razones fundantes de esta pretendida reforma se ntran en la particular forma de relacionarse de las i, llamada fenómeno transferencial. Esta particular ón entre el terapeuta y paciente, genera una rela- de dependencia emocional e idealización de la i del profesional, lo que a su vez conlleva a la ncia del cuestionamiento. Esta circunstancia es le de ser aprovechada por estos profesionales. La a situación reviste la relación médico-paciente, es, en ejercicio de su profesión se instala a partir torgamiento del saber y de su resultante: la cura, isma mistifica la relación y aumenta el grado de unza del paciente o víctima.

mismo, se pretende incluir al conviviente, amante e u ocasional de la madre de la víctima, refirién- al sujeto que con asiduidad, frecuenta el hogar madre de la víctima, manteniendo con ella rela- sexuales. Autores de renombre consideran a esta i fuera del ámbito de la agravante en razón de

que su falta de convivencia estable con el grupo fami- liar del sujeto imposibilitan ejercer las funciones de guarda o cuidado de la víctima.

Sin embargo, el trato continuado, la familiaridad y confianza con que es tratado por la madre de la victi- ma genera en ésta una confianza que es aun más no- toria en aquellos menores que se encuentran privados o carenciados, por diferentes motivos, de la imagen paterna. El abuso de esta ingenua confianza debe ser penado con mayor rigor.

Por otra parte, resulta relevante observar cómo en el artículo 72, limita el ejercicio del derecho a denun- ciar a los menores.

Si bien es cierto que dada la edad del denunciante no siempre es posible lo hagan la responsabilidad que tal actitud requiere, pero no es menos cierto que en los delitos contra la honestidad el mayor índice de víctimas son menores y sus victimarios miembros del grupo conviviente, sus propios progenitores o parientes directos.

Esta situación que normalmente no trasciende la inti- midad familiar no permite ni posibilita que terceras personas conozcan el hecho y lo denuncien. Como es obvio en estos casos no puede esperarse la denuncia de sus propios victimarios cuando éstos tienen a su cargo la guarda o patria potestad de estos menores o simplemente con la denuncia comprometerían a quie- nes se encuentran ligados por vínculos afectivos o de parentesco.

A esta situación debe sumarse como agravante el estado de dependencia y en algunos casos el sometimiento por medio de amenazas y presiones que ejercen los adultos o victimarios sobre la persona del menor.

Estos factores conllevan a que la denuncia del caso no se realice, e imposibilitan que el Estado pueda actuar de oficio. Y lo que es más grave aún es que en la reali- dad estos delitos continúan reiterándose hasta; la mayo- ría de edad de la víctima, con los daños graves e irre- versibles en la integridad y salud psicofísica del menor.

Por lo tanto, señor presidente, urge la necesidad de ofrecer al menor, en estas condiciones de la seguridad jurídica y contención necesaria, para facilitar el conoci- miento y denuncia de estos delitos que normalmente se mantienen ocultos en el marco de la intimidad familiar por la imposibilidad que tiene el menor de edad de denunciarlo.

Por eso, señor presidente, más allá de los recaudos legales procesales que puedan implementarse a los fines de dar seriedad a la denuncia realizada por un menor, resulta, a mi criterio, acertado otorgarles la facultad de denunciar hechos delictivos que ponen en peligro su salud e integridad psicofísica como se propone en la nueva redacción del artículo 72 del Código Penal.

Asimismo, resulta necesario aplicar con mayor rigor el régimen de la pena aplicable, aumentando los mí- nimos y en algunos casos los máximos.

Por lo expuesto, señor presidente, solicito se apruebe el presente proyecto de reforma.

Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

—A la Comisión de Legislación Penal.

13

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, in- cluya en el Programa de Alimentación y Nutrición Infan- til (PRANI) al Centro Experimental N° 8 "General Antonio Taboada", de la localidad de Clodomira, pro- vincia de Santiago del Estero.

Eduardo C. Avello.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El Centro Experimental N° 8 "General Antonio Ta- boada" de la localidad de Clodomira, provincia de Santiago del Estero, alberga en sus aulas a 600 alumnos, en turnos de mañana y tarde. Los niños provienen de hogares humildes, cuyos padres se desempeñan en su mayoría como "obreros golondrinas" y agricultores me- nores.

No obstante la falta de recursos, los padres colaboran en las tareas de mantenimiento del edificio escolar —en muy mal estado— y con gran esfuerzo realizan aportes voluntarios de \$2 para afrontar el pago de maestros de idiomas, y así mejorar la calidad de la enseñanza que sus hijos reciben.

Durante 1995 y 1996 fueron beneficiados con aportes para comedor escolar, pero luego fueron suspendidos y durante 1997 no recibieron ninguna ayuda. El estable- cimiento se encuentra incluido en el Plan Social Educa- tivo Programa 1.

Las autoridades educativas y la cooperadora mani- fiestan la necesidad de brindar un complemento alimen- tario a los alumnos, reforzando su nutrición, ya que los esfuerzos desplegados por la comunidad y los aportes voluntarios no resultan suficientes, y en muchos de estos hogares la escasa alimentación que reciben los niños no es la adecuada para aportar a un crecimiento digno. Sería muy valorada para esta unidad educativa la reposición del beneficio del comedor escolar.

Por las razones expuestas, solicito al señor presidente y a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de declaración.

Eduardo C. Avello.

—A la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

14

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacio- nal, a través de la Secretaría de Transporte y de la Subsecretaría de Transporte Aéreo Comercial, dependien-

tes del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, desestime la petición de la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. para suspender la operación de la ruta Buenos Aires-Lima-Los Angeles que, como aerolínea de bandera que monopoliza las operaciones de las rutas otorgadas a nuestro país, hasta la fecha usufructúa.

Cristina Gadea. — Juan P. Baylce. — Marcelo J. A. Stabrin. — Francisco U. Fragoso. — Alejandro M. Navea.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Aerolíneas Argentinas (ARSA) opera la ruta Buenos Aires-Lima-Los Angeles desde 1989, siendo tradicio- nalmente la línea de más alta ocupación (promedio 77 %) de la empresa y con excelente rentabilidad.

Los Angeles es un excelente punto de conexión a y desde el Lejano Oriente. Existe un tráfico de pasa- jeros muy importante entre Buenos Aires-Lima y el Lejano Oriente. El volumen de tránsito entre Lima, Tokio, Hong Kong, Taipei, Seul y viceversa, represen- tando aproximadamente u\$s 5.000.000 anuales. El 90 % de los pasajeros desde Lima con destino a Oriente (vía Los Angeles), compran pasajes de ida y vuelta, esto deja gran rentabilidad a la compañía ARSA.

El estado de California (Estados Unidos) tiene un sustancial mercado de pasajeros y carga hacia Lima y Buenos Aires, que en 1986 representó para ARSA u\$s 22.000.000.

Los derechos de tráfico Los Angeles-Lima-Los An- geles se perderían si se dejara de operar la ruta por más de tres meses (ARSA ha pedido suspensión por 180 días).

El pliego de licitación establecía que la empresa ad- judicataria no dejaría de volar los destinos que la aere- línea volaba antes de ser privatizada y el Convenio General de Transferencia (CGT), también refiere a este mismo punto.

Actualmente el Estado argentino tiene con el Estado peruano un convenio a favor de nuestro país, puesto que Aero Perú no puede operar recíprocamente las fre- cuencias otorgadas, un permiso de vuelo, autorizado por la Dirección General de Transporte Aéreo del Perú, el mismo es el permiso más precario otorgado por el gobierno peruano y en el transcurso de este año nues- tro país solicitaría un permiso por 3 años.

Los derechos de tráfico surgen de acuerdos bilatera- les o documentos de entendimiento entre países y son un bien del Estado argentino que es usufructuado por la compañía de bandera designada. A este respecto, en Lima, el 11 de enero de 1997, se publicó en el diario oficial "El Peruano", la resolución ministerial 004-97- MTC/15.12, sobre Reglamento de Infracciones y Sancio- nes Aeronáuticas que dice:

"Constituye infracción de carácter muy grave incum- plir o violar los términos, condiciones, limitaciones y otras obligaciones contenidas en el permiso de operación y/o de vuelo".

De suspenderse la operación de la ruta antes mencio- nada, estaríamos dando el más que pretendido argu-